

## **Fortalecimiento del marco fiscal de Venezuela (VE-T1089)**

El colapso observado en la economía venezolana no tiene precedentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que entre 2013 y 2021 la economía se contrajo un 77%, lo cual representa la mayor crisis registrada en América Latina y una de las mayores del mundo en países que se encuentran fuera de zonas de conflicto armado.

La capacidad institucional del Estado en general, y de las instituciones fiscales, en particular, no ha sido ajena a la crisis integral que enfrenta la economía venezolana. Luego del alto déficit fiscal observado en Venezuela, que precipitó el proceso hiperinflacionario, las finanzas públicas están en un proceso de consolidación desordenado y poco transparente, principalmente por medio de una reducción del gasto público y reducción de los subsidios en los servicios público, lo cual trae como consecuencias la ausencia de inversión pública y la falta de posibilidades por parte del Estado para responder a las necesidades de la población.

La gestión fiscal en los últimos dos años ha conllevado a una reducción significativa de la inflación, hasta alcanzar cifras de un dígito de manera consecutiva por diez meses y salir del proceso de hiperinflación en el 2021, sin embargo, las distorsiones macroeconómicas y fiscales siguen pesando. Para 2021 el FMI estima un déficit del Gobierno General de 8,9% del PIB, en un contexto global de altos precios del petróleo y una expansión significativa del gasto ante ajustes de los precios relativos. Si bien Venezuela se encuentra en cesación de pagos, la deuda bruta del Gobierno General estimada por el FMI representa más del 240% del PIB con potencial de seguir creciente a razón de atrasos y sentencias en contra de la república por parte del CIADI ante disputas vigentes entre los acreedores y el país.

Las cifras de deuda pública y déficit fiscal resumen la poca capacidad de control y la pobre gobernanza de las instituciones fiscales. Las instituciones fiscales han visto reducida su capacidad de gestionar los recursos públicos en forma eficiente, eficaz, controlada, sostenible y transparente. La cobertura institucional y sectorial del presupuesto no es comprehensiva; las funciones esenciales de recaudación de los recursos públicos, de programación y ejecución de pagos presupuestarios y de administración de la liquidez del sector público no están en cabeza exclusiva del Tesoro Público y no es claro en la práctica cómo se están ejerciendo las responsabilidades y funciones de gasto entre los niveles de gobierno ni con qué eficiencia se está prestando los servicios públicos que la población requiere.

Ante esta situación, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica, por un monto de US\$100.000 de recursos no reembolsables.<sup>1</sup>

El principal objetivo de esta cooperación técnica es contribuir a mejorar el marco fiscal de Venezuela a través del estudio y diseño de estrategias de política y gestión que mejoren la capacidad de las instituciones macro fiscales y de las relaciones fiscales intergubernamentales para la sostenibilidad fiscal y la prestación eficiente y equitativa de servicios públicos. El proyecto busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones macro fiscales y del federalismo fiscal de Venezuela, aportando nuevo conocimiento y estrategias de reformas y fortalecimiento de capacidades institucionales, a fin de mejorar la sostenibilidad fiscal y mejorar la prestación de servicios.

---

<sup>1</sup> De conformidad con la excepción de divulgación "Información Específica de Países", contemplada en el párrafo 4.1.(i) de la Política de Acceso a Información del Banco (GN-1831-28) y a solicitud del país beneficiario, el Documento de Cooperación Técnica aprobado no se divulgará. El presente documento corresponde a un resumen que ha sido consensuado con el país.